



Una papa caliente: el Ecuador que recibe Noboa

Milagros Aguirre A.

Quito, diciembre de 2023

Los informes de coyuntura cuentan con el auspicio de Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Berlín, Alemania

Daniel Noboa, el presidente más joven del Ecuador, asume, por año y medio, el gobierno de transición luego de que el hoy ex presidente Guillermo Lasso anunciara la “muerte cruzada”¹. Inicia su gestión con alta popularidad (74%) y le acompaña un gabinete que tiene un curioso perfil: gente muy joven (entre 30 y 45 años promedio), que proviene, principalmente, de las élites de Guayaquil. Ha escogido para sus ministerios de Gobierno e Interior y de sectores estratégicos, a mujeres ejecutivas. La primera impresión es que en los nombres de su gabinete Noboa quiere mostrar en el poder a una nueva generación que aparentemente no está contaminada por las mañas de la política tradicional. Su mesa chica está integrada por gentes más cercanas a su entorno familiar, como su madre, Anabela Azín, y al entorno empresarial de Grupo Noboa, Industrial Molinera, Avena Quaker y Nobexport.

Noboa llega al sillón presidencial con la consigna de la que fue su campaña: el es un *pro* y no un *anti*. No quiere conflictos sino más bien mostrarse dispuesto al diálogo político, sin las revanchas de los últimos años. Esa capacidad de diálogo ya ha dado unos primeros frutos en la flamante Asamblea Nacional: una alianza por la gobernabilidad, un pacto entre correístas, socialcristianos y el partido de gobierno (ADN), alianza, que, por un lado, crea la ilusión de una nueva política en donde el diálogo, más allá de las discrepancias ideológicas, es urgente y necesario. Pero a la vez esa alianza no está exenta de críticas y suspicacias: ¿qué negoció el correísmo?, ¿pacto de gobernabilidad o pacto de la impunidad? Nadie hace acuerdos sin nada a cambio, con firma en cheque en blanco, pero, sin acuerdos mínimos le será imposible gobernar. Sus ahora aliados en la Asamblea, apostaron al juicio político al ex presidente Guillermo Lasso (si bien no lograron la censura (pues ya no está en funciones), hicieron pública una resolución en la que determinaron que “es responsable político de la infracción constitucional de peculado”) y, sobre todo, a la destitución de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Esas, sus bazas sobre la mesa.

“Para el Nuevo Ecuador no hay líneas rojas para conversar, hay líneas rojas para el accionar. Tendremos tolerancia cero con la corrupción, este cambio debe destronar a los grupos de poder que se han enquistado en el Estado por décadas. Estamos abiertos al diálogo, pero no podemos pactar en contra del país”, ha dicho el presidente quien, además, en el acto de cambio de mando insistió en que no quiere que se le etiquete con los paradigmas de la política tradicional. Es decir, rechaza las etiquetas de pertenecer a la derecha, a la izquierda, o todo lo contrario. ¿Un híbrido ideológico?

¹ Mecanismo Constitucional que permite que el presidente renuncie y que pida la renuncia de la Asamblea Nacional y convoque nuevamente a elecciones.

El joven presidente aún es un misterio: reservado, sin la grandilocuencia y la retórica a la que han acostumbrado los líderes populistas y caudillos latinoamericanos y ecuatorianos. Se define a sí mismo como de “centro izquierda”, pero se ha reunido con la extrema derecha de Vox en España (al igual que la vicepresidenta, Verónica Abad). A propósito de vicepresidenta: el gobierno empieza con una fractura entre ellos y el presidente inició sus gestiones encargándole una inesperada tarea lo más lejos posible de su entorno: ha sido delegada a ir a Israel en una misión de paz en uno de los más graves conflictos de la historia contemporánea: la guerra Israel-Palestina. La misión encomendada derivada del distanciamiento entre el binomio es un tema con el que ha pasado entretenida la prensa nacional y a la conversación pública en las primeras 72 horas de nuevo gobierno.

Guillermo Lasso, a pocas horas de dejar el cargo, había firmado decretos de reformas laborales que Noboa, como parte de su primeras acciones públicas incluso antes de nombrar a todo su gabinete, dejó sin efecto por considerarlas contrarias a los derechos de los trabajadores e inconstitucionales. Acto seguido, firmó un decreto eliminando la tabla de consumo de drogas que, se supone, al ser mal aplicada habría sido utilizada por el microtráfico para penetrar en escuelas y colegios. Así, la simple eliminación de la tabla, puede ser un signo demagógico nacido de la presión durante el debate presidencial previo a elecciones: con tabla o sin tabla, el problema de adicciones a las drogas es ya un problema de salud pública y debería tratarse como tal. El decreto firmado por Noboa, en su artículo 2, encarga *a los ministerios de Interior y Salud, en el marco de sus competencias, el desarrollo de programas coordinados de información, prevención y control de consumos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación para consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.* Esta sí, una ardua tarea.

Lo siguiente ha sido presentar una reforma tributaria que incluye puntos como la devolución de IVA para el sector de la construcción, incentivos tributarios a empresas que contraten jóvenes graduados de universidades públicas y condonación de impuesto a la renta para negocios populares. También plantea incentivos tributarios para proyectos de energías renovables. Esta reforma ha sido presentada a la Asamblea y esta tendrá 30 días para estudiarla, aprobarla o vetarla.

Noboa tiene prisa y tiene poco tiempo para enfrentar los problemas del país que no son pocos. No puede hacer magia. Lo que se espera de él en este año y medio que tiene para gobernar es, al menos, algo de estabilidad. En esa estabilidad estará, además, la posibilidad de una candidatura para las elecciones del 2025.

¿Qué dejó Lasso en sus 900 días de gobierno? En un libro que presentó el día antes de dejar el sillón presidencial, sustituyendo al tradicional informe a la nación, hay un dato particularmente interesante: la reducción del índice de la desnutrición crónica infantil en 3.5%, pasando del 23,6 % de menores de dos años al 20,1 %. Traduciendo las cifras, al menos 20 000 infantes estarían libres de desnutrición crónica. En la otra cara de la moneda el gobierno de Lasso deja un país en números rojos y con malas calificaciones en muchas de las asignaturas, con una débil institucionalidad. Una bomba de tiempo.

El país que recibe Daniel Noboa está pintado más o menos así:

Sin luz

La crisis energética por la que atraviesa el Ecuador ha obligado a racionar el consumo de electricidad. Desde el 27 de octubre de este año 2023 y a los 14 años (2009) han vuelto los “apagones”, es decir, el racionamiento de energía eléctrica. Los primeros días los cortes fueron de hasta cuatro horas en distintos horarios y luego, de dos horas diarias, en todo el país. Un problema que, de no tomarse las previsiones del caso y pensar en ello a largo plazo, podrá durar años: se necesitan nuevas hidroeléctricas y proyectos de energías eólicas y solares para satisfacer la demanda creciente y ese tipo de proyectos toman tiempo. Por ahora, las soluciones son parches: seguir comprando energía a los vecinos Colombia y Perú, siempre y cuando la quieran vender o poner velas a los Santos para que llueva.

Con deudas

El presidente asume el país con números rojos (con números rojos también lo asumieron Moreno y Lasso). De acuerdo a la ONG Cordes y al Observatorio Político Fiscal, el año cierra con un déficit de cinco mil millones de dólares, es decir, casi 4% del PIB. Las deudas están por todos lados. Deudas pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deudas con los servidores públicos (los sueldos y sobre sueldos de diciembre sin financiar), deudas con organismos multilaterales. Deudas y más deudas.

La deuda pública total de Ecuador suma 75.227 millones de dólares hasta agosto de 2023, lo que equivale al 62% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Para cubrir el déficit, según los analistas, el gobierno deberá adquirir más deuda, tapar un hueco creando otro.

Inseguridad y violencia

Entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2023, 6044 personas fueron asesinadas en el país. Si esa media se mantiene en lo que resta del año, el país podría cerrar 2023 con un sangriento récord de 7607 asesinatos en un año y una tasa de 44,9 asesinatos por cada 100 000 habitantes. Violencia en las calles y en las cárceles (al menos 500 personas presas han sido asesinadas en las masacres carcelarias documentadas entre febrero de 2021 y julio de 2023).

Inseguridad y violencia son las mayores demandas ciudadanas. El dominio de las bandas delincuenciales vinculadas con negocios ilícitos (narcotráfico, minería, trata de personas y delincuencia común) han cambiado la vida de los ecuatorianos. Algunas poblaciones no pueden más con la zozobra cotidiana. Las bandas han creado una especie de “estado paralelo” (o narcoestado) que cobra *impuestos* más conocidos como *vacunas*, que amenaza a todos, incluidos los pequeños almacenes, emprendimientos, comedores y otros negocios y que se colude con policías, jueces, fiscales, autoridades locales, contratistas, etc. Estos grupos delincuenciales están ligados con otras actividades ilícitas, como la minería, además de contaminar contenedores de exportaciones con droga y de emplear en la cadena de tránsito a custodios, transportistas, vendedores. Estado, medios e instituciones financieras están penetrados por el narcotráfico según un informe oficial y un documento que apenas se conoce llamado *Estrategia nacional contra la delincuencia organizada 2023-2030*².

A 4.335 millones asciende el valor de la droga incautada en Ecuador durante el 2023. Un total de 189 toneladas han sido decomisadas y se ha detenido a 9 800 personas relacionadas con sustancias ilícitas en varias escalas. No existe un cálculo real y actual sobre la droga que se incauta versus la que circula en y a través de Ecuador. De acuerdo a información de prensa, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional concluye que la droga que logra pasar las fronteras ecuatorianas y llegar a su destino sería un 44% de la que se envía.

Un tema que ha crecido en los últimos años como una gran bola de nieve y para el que no se ven aún salidas. Noboa, cuando candidato, habló de la inseguridad como parte de los problemas estructurales de un país empobrecido

² Este documento se puede descargar en <https://drive.google.com/file/d/10wz2hmLBcMeURqppExlAezc5hCAuzQ2z/view>

con una enorme brecha cuya miseria se refleja en esta ola de violencia y es caldo de cultivo para las grandes mafias que enrolan a jóvenes desempleados en sus filas. También propuso un “Plan Fénix” que incluía cárceles barcasas y asesoría israelí en temas de seguridad. Entre las primeras decisiones del gobernante: el cambio de la cúpula militar a quienes les ha encomendado la tarea de enfrentar esta “guerra” contra la delincuencia. La ministra de Gobierno e Interior también ha hecho anuncios en ese sentido, cambiando la cúpula policial.

Agenda pendiente de movimiento indígena y de los movimientos sociales

El movimiento indígena salió mal parado en los resultados de estas elecciones anticipadas: Yaku Pérez Guartambel, quien estuvo tan cerca de llegar al poder en 2021, entonces como representante de Pachakutik y con votos de las bases de CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), quedó en muy mala posición en 2023, en el penúltimo puesto. Se lanzó a la presidencia con un movimiento nuevo —llamado Yaku (agua)— pero sin mayor apoyo de las bases de su organización. Pachakutik, el partido llamado el brazo político de CONAIE, que hizo parte del bloque más fuerte en la Asamblea de 2021 con 27 asambleístas, dos años después quedó con apenas cinco legisladores. Un remezón para el movimiento indígena que ha tenido que reflexionar ahora sobre su organización, recuperar su partido (que ha estado en manos de grupos mestizos) y trabajar en el fortalecimiento organizativo, probablemente preparando un candidato que pueda terciar en las elecciones de 2025.

No sería la primera vez que las propuestas del movimiento indígena y organizaciones sociales quedan en el limbo, en carpeta y bajo llave, hasta un nuevo estallido. Los 218 acuerdos a los que se llegó en el proceso de diálogo con el gobierno en 2022 luego del paro nacional, están ahí y el nuevo gobierno —y las universidades y las iglesias y ONG que participaron en el proceso y facilitaron el diálogo, incluida la GIZ— debe hacerles seguimiento y garantizar su cumplimiento. El proceso de diálogo y sus resultados deberían ser parte de una hoja de ruta de los gobiernos para reparar en algo, el olvido de las poblaciones menos atendidas del país.

Noboa, si bien ganó con alta votación en la sierra central donde hay alta población indígena, no tuvo muy buena votación en muchas de las comunidades indígenas: Guamote, Colta, Suscal, Alausí, Otavalo, Pujilí, Sigchos, Cotacachi, Cayambe, Nabón, cuya preferencia fue para la candidata de la Revolución Ciudadana. Pero más allá de los números electorales, hay

una deuda pendiente con el movimiento indígena en varios temas entre los que están el acceso a la salud, educación, vivienda, derechos y defensas territoriales frente al extractivismo, incentivos y subsidios a la agricultura, temas de interculturalidad y de justicia, que este gobierno deberá atender y al que no puede darles la espalda. El gobierno no ha tenido ningún acercamiento ni ha establecido todavía, en sus primeros días, ningún acercamiento con la dirigencia indígena. Pero es claro que los indígenas no abandonarán su agenda de lucha, aunque por ahora exista una tregua pues están, además, en procesos de reorganización interna: apenas el 30 de noviembre fue la toma de posesión de la nueva coordinación de Pachakutik, encargada ahora a Guillermo Churuchumbi, quien fuera alcalde de Cayambe (sierra norte del país).

El presidente de CONAIE, Leonidas Iza, reaccionó a las primeras medidas de Daniel Noboa comentando acerca de la propuesta de ley económica urgente. “Estamos estudiando la propuesta, sin embargo, le pedimos al presidente Noboa que cobre los impuestos a quienes están debiendo, hay más de dos mil millones de dólares que están debiendo los grupos empresariales incluyendo los del grupo Noboa que debe 86 millones, ahí le creemos”, dijo, y añadió que “no podemos seguir viviendo de remisiones tributarias que se han hecho en los gobiernos de Correa, Moreno y Lasso. En esta ley nuevamente hay esas remisiones. ¿Quién va a pagar la crisis de este país? Los pobres no podemos seguir pagando. No es radicalismo, esto tiene que ver con la responsabilidad económica que todos tenemos en este país”, dijo el dirigente quien, además, ratificó su posición frente a los juicios políticos a Lasso y Salazar, coincidiendo con la agenda política de la Revolución Ciudadana.

El tiempo del nuevo gobierno es muy corto y las necesidades muy amplias, no solo del sector indígena campesino sino también del indígena en las zonas urbanas y de otros sectores de la sociedad, incluyendo los sindicatos y gremios de trabajadores, trabajadores informales, servidores públicos, jubilados, etc. Un hervidero de problemas sin resolver. Una olla de presión siempre a punto de estallar. Una papa caliente con la que el presidente se puede quemar.